

57ª REUNION — Continuación de la 41ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 29 DE 1958

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Enrique Mario Zanni  
y Jorge Raúl Decavi

Secretario: doctor Eduardo T. Oliver. — Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ABAROA, Rufino Vicente  
ALDERETE, Elío  
ALZABE, Pedro Bernabé  
AQUINO, Porfirio Antonio  
ARAMBURÚ, Julio P.  
ARITO, Juan  
ARMENDARIZ, Alejandro  
AYBAR, José Antonio  
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.  
BARRIO, Luis  
BECERRA, Carlos Alberto  
BECERRA, Olegario Antonio  
BEIRÓ, Angel Francisco  
BELNICOFF, Manuel  
BERNASCONI, Mario  
BERTONE, Marcos R.  
BLANCO, Rubén Víctor M.  
BOFFI, Luis L.  
BOGLIANO, Palmiro B.  
BONET CONVALI, Salvador  
BONIFACIO, Juan José  
BREYTER, Isaac  
BRUZZO IRAOLA, Juan P.  
BULIT GONÍ, Enrique A.  
BURDEOS, José Antonio  
BUSTOS, Jerónimo L.  
CAGGIANO, Angel R.  
CALABRESE, Pablo  
CAMET, Carlos Ernesto  
CANEPÁ, Sebastián Oreste  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRERA, Rodolfo Ricardo  
CARRETONI, Jorge C.  
CASAS, José B.  
CASELLA PIÑERO, Juan M.  
CASTILLO, Hugo Enrique  
CIALZETA, Domingo  
CONDOLUCI, Domingo A.  
CONTTE (h.), Adolfo  
CONTIN, Carlos R.  
CORREA, Carlos María  
CORTÉS, Ezequiel  
CUARETTA, César Ramón  
CUEVAZ, Agustín  
CHAUVERO, Luciano  
DAMIANI, Salvador  
DECAVI, Jorge Raúl  
DE LA VEGA, Juan Carlos  
DESPOUX, Pablo Pedro  
DÍAZ, Rosario Domingo

DOMINGORENA, Horacio Osvaldo  
DOURS, Roberto José  
ESCALADA, Alfredo H.  
FASCE, Antonio  
FAYA, Luis  
FEIGUÍN de FERRARI, Berta  
FERNANDEZ, José Manuel  
FERRARIS, Jorge Domingo  
FERREIRA, Jorge W.  
FOSSATI, Evers Nelson  
FREGA, José  
FUERTES, A. Ricardo  
GALEANO, Roberto A.  
GALLO, Luis M.  
GARCIA, Ernesto  
GARCIA FLORES, José I.  
GARCIA VEIGA, Ignacio  
GARONA, Alberto Agustín  
GIANSEIRA, Marino Alejandro  
GILI, Miguel  
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario  
GOLDSTRAJ, Zenón  
GÓMEZ MACHADO, Héctor  
GONZÁLEZ, Ricardo A.  
GOROSPE, Valentín  
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.  
GUTIÉRREZ, José María  
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.  
GYSSÉL, Néstor Juan  
HEREDIA, Gilberto L.  
HERNANDEZ RAMÍREZ, Rafael  
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.  
JUAREZ PEÑALVA, Miguel Angel  
JUNIN, Simón  
JURI, Jorge  
KRONHAUS, Arnaldo  
LAFUENTE, Ambrosio César  
LAFUENTE, Augusto Antonio  
LAGOS, César M.  
LEÓN, Luis Agustín  
LICEAGA, María Teresa M. de  
LISCETTI, Carlos A. M.  
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo  
LÓPEZ, Juan Raúl  
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.  
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María  
LÓPEZ SANSON, Ernesto  
LÓPEZ SERROT, Oscar  
LUELMO, Horacio Flavio  
LLUGDAR, Elías N.  
MALUF, Emilio

MANUBENS CALVET, Reginaldo  
MARCONATO, Pedro Luis  
MARCHINI, Atílio Enrique O.  
MARINI, Anselmo A.  
MARTIRANI, Luis  
MAS, Juan Antonio  
MERCADO, Valentín A.  
MIGLIARO, Victorio M.  
MONJARDÍN, Federico F.  
MONTE, Ricardo Alvaro  
MORENO, Eufemio Teófilo  
MOSCA, Gabriel Carlos J.  
MUSACCHIO, Vicente M.  
NASSIF NEME, Carim  
OREJA, Pablo Fermín  
FAEZ, Nieves Humberto  
PANELO, Ricardo E.  
PARENTE, Miguel A.  
PARODI GRIMAU, Misael J.  
PARRY, Enrique  
PAVIOLO, Ricardo J.  
PENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.  
PERALTA, Domingo Orlando A.  
PERETTE, Carlos H.  
PERKINS, Jorge W.  
PITTALUGA, José Saturnino  
PITTO, Luis María  
POITEVIN, R. Emilio  
POLOGNA, Aurelio José  
PONCE DE LEÓN, Martín A.  
POSSE, Melchor S.  
POZZIO, Antulio F.  
PRECE, Angel Oscar  
PURICELLI, Valdemar  
RAVETTI, Francisco Antonio  
RECIO, José A.  
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín  
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José  
RODRÍGUEZ DÍAZ, Rogelio S.  
ROSENKRANTZ, Eduardo S.  
RUIZ, Lucio Carlos  
SAGO, Fayiz  
SALIM, Abraham  
SALOMONE, Humberto  
SANTAGADA, Nélido E.  
SANTONI, Nabucodonosor  
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel  
SCHWEIZER, Bernardo  
SEGOVIA, Carlos A.  
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos

SIRENA, Antonio C. P.  
SOLANAS, Juan Carlos  
SOLARI, Juan Alberto  
SPANGENBERG, Enrique  
STORANI, Conrado Hugo  
SUAREZ, Fausto Roberto  
SUJEROS, Pedro Ignacio P.  
TARULLI, Pascual  
TECCO, Luis Alberto  
TELLO ROSAS, Cándido  
TESSIO, Aldo E.  
TONELLI, Haroldo Juan  
TORTONESE, Dante Oscar

TORTORA, Antonio  
TROILO, Eleogardo B.  
URCELAY, Rafael Cándido  
UZAL, Francisco Hipólito  
VALLE, Salvador  
VECCHIETTI, Augusto Néstor  
VERDAGUER, Armando Miguel  
VILLAR, Alfredo  
VINCIGUERRA, Rómulo  
ZANNI, Enrique Mario  
ZARRIELLO, Raúl Jorge  
ZUBIAURRE, Alberto

## AUSENTES. CON LICENCIA:

ERREA, Daniel  
HEREDIA, Bernardo M.  
LICEAGA, José V.  
MANTECÓN, Esteban  
RIVERO, Jorge I.

## AUSENTES. CON AVISO:

BAUDUCCO, Enrique  
BENEVENTANO, Domingo  
MANES, Juan Carlos

## SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 5008.)
- 2.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara. (Página 5008.)
- 3.—Moción del señor diputado Perette: publicación de aclaraciones relativas a conceptos vertidos en los debates de la Honorable Cámara. (Página 5011.)
- 4.—Manifestaciones del señor diputado J. R. López con motivo de la presencia de delegaciones extranjeras. (Página 5012.)
- 5.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de resolución por el que se designa una comisión especial investigadora de procedimientos judiciales vinculados con la comisión de un homicidio. (Página 5012.) Se sanciona.
- 6.—Moción del señor diputado Contte, de preferencia para la consideración del proyecto de resolución en revisión sobre designación de miembros del grupo interparlamentario argentino delegados a la Conferencia Interparlamentaria Mundial. (Página 5019.)
- 7.—Consideración del proyecto de resolución a que se refiere el número 6 de este sumario. (Página 5019.) Se sanciona.
- 8.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley por el que se dispone la conmemoración del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. (Página 5020.) Se sanciona.
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Municipales en el proyecto de ley de organización del Registro de estado civil en la Capital Federal. (Página 5023.) Se sanciona.
- 10.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre ornamentación de edificios públicos. (Página 5032.) Se sanciona.
- 11.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General por el que dispone la transferencia de terrenos al club atlético Vélez Sarsfield. (Página 5035.) Se sanciona.
- 12.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General por el que se acuerda donación de terrenos a los clubes Independiente y Racing. (Página 5036.) Se sanciona.
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General por el que se acuerda dona-

ción de terrenos al club Dock Sur. (Página 5036.) Se sanciona.

- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General por el que se acuerda donación de terrenos al club El Porvenir. (Página 5037.) Se sanciona.
- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General por el que se acuerda donación de terrenos al club atlético Lanús. (Página 5038.) Se sanciona.
- 16.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General por el que se acuerda donación de terrenos al club Atlanta. (Página 5038.) Se sanciona.
- 17.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transportes en el proyecto de ley sobre construcción del camino que une Villa Dolores con Río Cuarto. (Página 5039.) Se sanciona.
- 18.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley por el que se acuerda un subsidio para construcción del edificio del Colegio Nacional de Corral de Bustos, Córdoba. (Página 5040.) Se sanciona.
- 19.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación por el que se dispone la creación de una escuela comercial en Alberti, provincia de Buenos Aires. (Página 5041.) Se sanciona.
- 20.—Consideración del despacho de las comisiones de Relaciones Exteriores y Cultos y de Asuntos Municipales en el proyecto de resolución por el que se dispone la adhesión al Congreso Interamericano de Municipios. (Página 5042.) Se sanciona.
- 21.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley por el que se dispone la construcción de edificio para el Colegio Nacional en Diamante, Entre Ríos. (Página 5044.) Se sanciona.
- 22.—Moción del señor diputado Belró de que vuelva a comisión el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley que dispone la creación del Consejo Nacional del Trabajo Portuario. (Página 5045.)
- 23.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley que dis-

- pone la construcción de edificio para escuela en Tartagal, Salta. (Página 5045.) Se sanciona.
- 24.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley aumento de haber jubilatorio de costureras del Estado. (Página 5046.) Se sanciona.
- 25.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley que dispone la creación de un colegio nacional en Charata, provincia de Chaco. (Página 5047.) Se sanciona.
- 26.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre construcción de edificio para el Colegio Nacional en Concordia, Entre Ríos. (Página 5048.) Se sanciona.
- 27.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley por el que se acuerda subsidio al Círculo Médico de Rosario. (Página 5050.) Se sanciona.
- 28.—**Integración de comisiones.** (Página 5051.)
- 29.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre construcción de edificio para la Escuela de Comercio en Orán, Salta. (Página 5051.) Se sanciona.
- 30.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre construcción de edificio para la Escuela Industrial en Salta. (Página 5052.) Se sanciona.
- 31.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas por el que se acuerda subsidio al Círculo de la Prensa de Tucumán. (Página 5053.) Se sanciona.
- 32.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de declaración sobre créditos para adquisición de implementos agrícolas. (Página 5054.) Se sanciona.
- 33.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley de ajuste de haberes del personal del Ministerio de Salud Pública. (Página 5057.) Se sanciona.
- 34.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley por el que se acuerda subsidio a la Universidad Popular de Villa del Parque. (Página 5059.) Se sanciona.
- 35.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Obras Públicas, en el proyecto de ley sobre construcción de edificio para oficinas de correos en Villaguay, Entre Ríos. (Página 5060.) Se sanciona.
- 36.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Salud Pública en el proyecto de ley por el que se dispone aumentos de subsidios otorgados por la Dirección Nacional de Asistencia Social. (Página 5062.) Se sanciona.
- 37.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley por el que se dispone la construcción de una estación ferroviaria en Mar del Plata. (Página 5063.) Se sanciona.
- 38.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de declaración por el que se propicia la provisión de fondos para solventar gastos de la Convención Constituyente de Misiones. (Página 5064.)
- 39.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley por el que se dispone la construcción de edificio de correos en Moldes, Córdoba. (Página 5067.) Se sanciona.
- 40.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre construcción de edificios escolares en Saladillo, Buenos Aires. (Página 5068.) Se sanciona.
- 41.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre creación de Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos. (Página 5069.) Se sanciona.
- 42.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración sobre pavimentación de la ruta 98 en Reconquista, Santa Fe. (Página 5070.) Se sanciona.
- 43.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Legislación General y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley nacional de turismo. (Página 5071.) Se sanciona.
- 44.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley que dispone la creación del Instituto Nacional del Profesorado Secundario en San Juan. (Página 5098.) Se sanciona.
- 45.—**Consideración** del despacho de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se crea el ente minero de Agua de Dionisio para la explotación de minerales de Farallón Negro, Catamarca. (Página 5099.)
- 46.—**Fijación del orden de la labor** de la Honorable Cámara. (Página 5116.)
- 47.—**Consideración** del despacho de la Comisión Especial encargada de proyectar la legislación sobre locaciones urbanas en el proyecto de ley sobre prórroga de la legislación de alquileres. (Página 5125.) Se sanciona.
- 48.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Educación en el proyecto de ley, en revisión, por el que se modifica el artículo 28 del decreto ley 6.403/55 sobre organización universitaria. (Página 5128.)
- 49.—**Apéndice:**
- I.—**Sanciones de la Honorable Cámara.** (Página 5139.)
- II.—**Inserciones.** (Página 5153.)

ventud de mi provincia y de la zona de influencia que tendrá este instituto, que sobrepasará los límites de la provincia, en cuya ciudad capital tendrá su sede. Satisfará los anhelos de todos los sanjuaninos y llenará de gozo el espíritu del maestro de América.

Para no ser más extenso y para no intervenir en la discusión en particular, pido que el nombre que llevará este instituto, Domingo Faustino Sarmiento, se ponga entre comillas.

Pido a la Honorable Cámara excusas por haber hablado demasiado en este momento de necesidad de tantas «efectividades conducentes». (Risas.)

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Señor diputado por San Juan: en el original el nombre Domingo Faustino Sarmiento está entre comillas.

**Sr. Heredia (G. L.).** — Bien, señor presidente.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Se va a votar en general el proyecto de ley.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 108 señores diputados.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — En consideración en particular.

**Sr. Heredia (G. L.).** — Pido que se den por aprobados los artículos no observados.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — En consideración el artículo 1º.

— Se aprueba, aprobándose asimismo el artículo 2º.

— El artículo 3º es de forma.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

45

## EXPLOTACION DE MINERALES DE FARALLON NEGRO

(Orden del día número 495)

### Despacho de comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Industria y de Presupuestos y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, referente a la creación de un ente autárquico denominado Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que ha de tomar a su cargo el estudio, cateo, explotación y comercialización de los minerales existentes en Farallón Negro o Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de

Catamarca; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de las comisiones, 27 de septiembre de 1958.

Angel Oscar Prece. — Simón Junín.  
— Juan Arito. — José B. Casás. — Hugo Enrique Castillo. — Jorge Raúl Decavi. — Luis M. Gallo. — Ricardo A. González. — Gilberto L. Heredia. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Horacio María López Ballesteros. — Valentín A. Mercado. — Agustín Rodríguez Araya. — Abraham Salim. — Nabucodonosor Santoni. — Enrique Spangenberg. — Rómulo Vinciguerra.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1958.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Créase Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.

Art. 2º — El domicilio de YMAD estará en la provincia de Catamarca, con la ubicación precisa, dentro de la jurisdicción provincial, que determine el directorio de la empresa; sin perjuicio de las delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán u otros lugares del país.

Art. 3º — YMAD tiene la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado para la realización de su objeto y en consecuencia podrá adquirir toda clase de derechos, inclusive derechos mineros; contraer toda clase de obligaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos reglados por los códigos de la Nación y leyes generales y especiales pertinentes.

Art. 4º — La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos

(1) Véase el texto de la sanción en la página 5153.

cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 km<sup>2</sup>.), definida por un rectángulo cuyo lado mayor de veintitrés kilómetros cuatrocientos metros (23,4 km.) tiene su punto de partida en el paralelo 27° 20' y el meridiano 66° 48' 30" y con dirección Sur 62°. Este pasa por el puesto de Ovejera; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce kilómetros setecientos metros (14,7 km.) que pasa por los puestos de Vizcachas y Escaleras; desde el extremo de esta línea, una perpendicular que pasa por el puesto de Aguada y desde el extremo de esta última línea, otra perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida.

Art. 59 — YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.

Art. 6º — YMAD estará dirigido y administrado por un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º, o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario y la resolución del directorio, a su respecto, será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Los vocales del directorio se renovarán por mitades cada dos años, debiéndose determinar por sorteo el vocal designado por la provincia de Catamarca y el designado por la Universidad Nacional de Tucumán que deben cesar en sus funciones en la primera renovación.

El directorio designará cada año un vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de impedimento o ausencia.

Cuando se produzca una vacante durante el período para el cual haya sido designado un miembro del directorio, el nombramiento del reemplazante se hará sólo por el tiempo que falte para cumplir el período. Los miembros del directorio que hayan terminado su período continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designe su reemplazante.

Las resoluciones del directorio se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. El quórum para deliberar válidamente será de tres miembros. En ningún caso los miembros del directorio po-

drán negarse a emitir su voto, sin perjuicio de las reservas que estimasen del caso formular y de las excusaciones que correspondan por ley, de las que se dejará constancia en el libro de actas.

Art. 7º — Si se denunciara a tres o más de los miembros del directorio como incurso en algunas de las causales previstas en el artículo 6º, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio. Previa la confirmación de la denuncia, observando todas las garantías de ley, el interventor declarará la caducidad en sus funciones de los afectados, pero en ningún caso podrá asumir él mismo tales funciones. El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Art. 8º — Para ser miembro del directorio se requiere ser ciudadano argentino, mayor de treinta años de edad, o, en caso de ser naturalizado, con quince años de ciudadanía en ejercicio.

Art. 9º — No podrán ser miembros del directorio:

- a) Los que ejerzan cualquiera otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de las de la docencia;
- b) Los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil y los que hayan sido condenados por delitos comunes;
- c) Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la exploración, explotación, industrialización y comercialización privada de minerales, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.

Los miembros del directorio que con posterioridad a su nombramiento cayeren en algunos de estos impedimentos, cesarán en sus funciones y serán reemplazados de inmediato.

Art. 10. — El directorio tendrá todas las facultades y atribuciones requeridas para el cumplimiento integral de la función que se le confiere, correspondiéndole en especial:

- a) Realizar en los términos del artículo 1º el estudio, exploración, cateo, explotación y comercialización de todos los minerales existentes en la zona delimitada por el artículo 4º, a cuyo fin podrá ejecutar y ejercer los actos y funciones establecidos en el artículo 3º;
- b) Conferir poderes generales y especiales y revocarlos;
- c) Disponer la organización interna de la empresa y reglamentar y aprobar las

normas complementarias del régimen de contratación de obras y servicios, adquisiciones, etcétera;

d) Dictar el reglamento interno de la empresa, con sujeción a las disposiciones de esta ley y del estatuto orgánico que, a propuesta del directorio, apruebe el Poder Ejecutivo. Mientras tanto regirá el estatuto orgánico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en todo cuanto resulte aplicable;

e) Nombrar, contratar, promover, suspender, aceptar renunciaciones y remover al personal superior, administrativo y técnico.

En cuanto al personal inferior, esas mismas facultades competirán al superintendente o gerente general de la empresa;

f) Preparar anualmente el plan de acción a cumplir durante el o los ejercicios económicos siguientes, acompañando una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar por la empresa y un presupuesto de explotación que contemple en forma integral y en grandes rubros, los recursos y erogaciones que han de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, así como la estimación de los probables resultados a obtener. El plan de acción y el presupuesto de explotación deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo nacional, dando cuenta de ello al Congreso. Si por cualquier circunstancia no lo fuere antes de iniciarse el ejercicio económico a que se refiere, continuará aplicándose el presupuesto anterior;

g) Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios en el presupuesto, sin alterar su monto y dando cuenta de ello al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros;

h) Elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos, y al finalizar cada ejercicio, un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas;

i) Elevar anualmente a los poderes ejecutivos de la Nación y de la provincia de Catamarca y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán una memoria descriptiva y comparativa de la gestión realizada en relación con lo previsto en el plan de acción;

j) Fijar a propuesta del presidente la retribución extraordinaria que deba darse a los funcionarios, empleados y obreros en

razón de su eficacia en el trabajo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte y dentro de un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas;

k) Crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos;

l) Crear en la provincia de Catamarca un instituto de investigaciones mineras y una escuela de minería a fin de promover investigaciones mineras y metalúrgicas y la formación de personal especializado.

Art. 11. — Corresponde al presidente del directorio:

a) Tener la representación legal y administrativa de la empresa;

b) Girar sobre los fondos de la empresa, debiendo su firma ser acompañada por la del contador y tesorero o por la del funcionario autorizado para ello por el directorio;

c) Convocar y presidir las reuniones del directorio y cumplir y hacer cumplir sus resoluciones;

d) Resolver por sí todos aquellos asuntos para los cuales esté autorizado por el reglamento interno que dicte el directorio, así como también aquellos otros que están reservados a este último, cuando razones de extrema urgencia así lo exijan, con cargo de dar cuenta a dicho cuerpo, a cuyo efecto deberá citarlo de inmediato.

Art. 12. — La provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán podrán designar uno o más delegados, cuyas atribuciones serán las siguientes:

a) Examinar los libros y documentos de la empresa y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie;

b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere el inciso f) del artículo 10.

Estos delegados serán retribuidos por la parte a la que representen y ejercerán sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la explotación. Las autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de los delegados, las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 13. — En sus relaciones con terceros YMAD se regirá por el derecho privado. A los efectos de este artículo se considerarán terceros todas las personas de existencia visible o jurídica, constituidas éstas por capitales privados o mixtos, y las dependencias o empresas del

Estado nacional, provincial o municipal. En sus relaciones con la provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentaciones vigentes. En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional, actuará por intermedio de la Secretaría de Industria y Minería del Ministerio de Economía, siéndole, en ese aspecto, aplicables las normas de derecho público.

Art. 14. — YMAD efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, mediante licitación pública, licitación privada, concurso privado de precios o contratación directa, según las normas que se establezcan en su reglamento interno. Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 15. — Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos moneda nacional). Además, le otorgará en préstamo, sin interés, reembolsable en diez cuotas anuales iguales a contar del cuarto año de su constitución, hasta la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional), importe que también el Poder Ejecutivo tomará de rentas generales con imputación a la presente ley.

Art. 16. — Independientemente de los recursos ordinarios provenientes de sus actividades, YMAD podrá hacer uso del crédito, hasta el monto que lo autorice su presupuesto, para completar o facilitar la financiación de las mismas, a cuyo efecto podrá:

- a) Solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales, mixtas o privadas, y recurrir a cualquiera otra forma de crédito o financiación;
- b) Recibir contribuciones del Estado nacional, reintegrables o no. En este último caso el importe de la contribución importará aumento del capital de la empresa.

Art. 17. — A los efectos de la fiscalización del manejo de los fondos y ejecución del presupuesto, el Tribunal de Cuentas de la Nación podrá destacar periódicamente uno o más auditores al solo efecto de:

- a) Verificar la correcta aplicación del plan de cuentas, la veracidad, exactitud y simultaneidad de las registraciones y la oportuna presentación de los estados periódicos;
- b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan y si encuadran dentro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados.

Los auditores propiciarán, ante el Tribunal de Cuentas y a efectos de que el mismo resuelva conforme con las atribuciones que le acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, sin que en ningún caso las observaciones formuladas tengan efecto suspensivo.

Art. 18. — Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

- a) El sesenta por ciento (60 %) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al cincuenta por ciento (50 %) del total general, destinándose el diez por ciento (10 %) restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
- b) El cuarenta por ciento (40 %) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
- c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %) se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.

Art. 19. — YMAD deberá:

- a) Instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio cuya capacidad mínima será de doscientos cincuenta toneladas por día, en un plazo máximo de siete (7) años a partir de su constitución, y realizar el desarrollo de una exploración adecuada;
- b) Mantener una producción relacionada con la capacidad de la planta.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería.

Art. 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo nacional podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa por haberse declarado la caducidad de la concesión. En tal caso, el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación, que puedan separarse de la mina sin perjuicio para

ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa, que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado en el Tesoro Nacional.

El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Art. 21. — Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería y de las tasas retributivas de servicios públicos efectivamente prestados.

Art. 22. — En cualquier caso de caducidad de la concesión, los yacimientos quedarán reservados para el Estado por el término de un año.

Art. 23. — En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado.

Art. 24. — Derógase el decreto ley 270/58.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

LUIS MARÍA GUIDO.

*Luis Abel Viscay.*

#### ANTECEDENTE

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1958.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con el objeto de someter a la decisión del Congreso Nacional el adjunto proyecto de ley mediante el cual se persigue la creación del ente autárquico que ha de emprender la explotación integral de los yacimientos de oro, plata y manganeso situados en Farallón Negro o Agua de Dionisio, lugar de la provincia de Catamarca.

Dicho proyecto subroga al decreto ley 270/58, cuya modificación se acordó por la cláusula séptima de la convención y declaración suscritas el 7 de junio último por el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, su excelencia el señor gobernador de Catamarca, el señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales.

De acuerdo con la cláusula octava de dicho documento, aprobado por ley 1.695 de la Honorable Legislatura de Catamarca, el proyecto adjunto fue redactado íntegramente por representantes de la provincia de Catamarca, que fueron los doctores Ricardo G. A. Herrera y Ramón Bonaterra, y de la Universidad Nacional de Tucumán, los doctores Celedonio Gutiérrez y Horace W. Bliss, todos ellos especialmente designados al efecto, habiéndose introducido algunas variantes que se estima no alteran lo substancial del instrumento.

El carácter público y notorio alcanzado por todo lo relativo a las minas de Agua de Dionisio eximen al Poder Ejecutivo de relatar los antecedentes de la

cuestión, suficientemente conocidos, y de fundar la necesidad y urgencia en constituir el ente explotador.

No obstante ello, cumplo en señalar a vuestra honorabilidad una circunstancia que torna angustiosa la necesidad y urgencia invocadas: el próximo vencimiento de la reserva de la zona, establecido para el día 31 de diciembre próximo por el decreto ley 17.346/57. Si antes de esa fecha no se ha promulgado y publicado la ley propiciada, en virtud de cuyo artículo 23 deberá considerarse prorrogado el plazo de la reserva, los yacimientos podrán desde entonces ser válidamente solicitados en concesión por cualquier particular, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Minería. El Poder Ejecutivo confía en que ello no ha de ocurrir, fundándose en la responsabilidad evidenciada por los señores miembros del Congreso nacional y en la importancia de orden económico, cultural, social y político que el asunto reviste.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO FRONZIZI.

*Emilio Donato del Carril. — Ricardo Lumí.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Créase Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley, y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.

Art. 2º — El domicilio de YMAD estará en la provincia de Catamarca, con la ubicación precisa, dentro de la jurisdicción provincial que determine el directorio de la empresa, sin perjuicio de las delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán u otros lugares del país.

Art. 3º — YMAD tiene la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado para la realización de su objeto y, en consecuencia, podrá adquirir toda clase de derechos, inclusive derechos mineros; contraer toda clase de obligaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos reglados por los códigos de la Nación y leyes generales y especiales pertinentes.

Art. 4º — La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería, en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfín, departamento de Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 km.2), definida por un rectángulo, cuyo lado mayor, de veintitrés kilómetros cuatrocientos metros (23,4 km.), tiene su punto de partida en el paralero 27º 20' y el meridiano 66º 48' 30" y con dirección Sur 62º. Este pasa por el puesto de Ovejera; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce kilómetros setecientos metros (14,7 km.), que pasa por los puestos de Vizcachas y Escaleras; desde el extremo de esta línea, una perpendicular que pasa por el puesto de Aguada, y desde el extremo de esta última línea otra perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida.

Art. 5º — YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.

Art. 6º — YMAD estará dirigido y administrado por un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario y la resolución del directorio a su respecto será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Los vocales del directorio se renovarán por mitades cada dos años, debiéndose determinar por sorteo el vocal designado por la provincia de Catamarca y el designado por la Universidad Nacional de Tucumán, que deben cesar en sus funciones en la primera renovación.

El directorio designará cada año un vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de impedimento o ausencia.

Cuando se produzca una vacante durante el período para el cual haya sido designado un miembro del directorio, el nombramiento del reemplazante se hará sólo por el tiempo que falte para cumplir el período. Los miembros del directorio que hayan terminado su período continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designe su reemplazante.

Las resoluciones del directorio se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. El quórum para deliberar válidamente será de tres miembros. En ningún caso los miembros del directorio podrán negarse a emitir su voto, sin perjuicio de las reservas que estimasen del caso formular y de las excusaciones que correspondan por ley, de las que se dejará constancia en el libro de actas.

Art. 7º — Si se denunciara a tres o más de los miembros del directorio como incursos en algunas de las causales previstas en el artículo 6º, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio. Previa la confirmación de la denuncia, observando todas las garantías de ley, el interventor declarará la caducidad en sus funciones de los afectados, pero en ningún caso podrá asumir el mismo tales funciones. El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Art. 8º — Para ser miembro del directorio se requiere ser ciudadano argentino mayor de treinta años de edad, o, en caso de ser naturalizado, con quince años de ciudadanía en ejercicio.

Art. 9º — No podrán ser miembros del directorio:

- a) Los que ejerzan cualquiera otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de las de la docencia;

- b) Los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil y los que hayan sido condenados por delitos comunes;

- c) Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la explotación, exploración, industria y comercio privado del oro, la plata y el manganeso, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.

Los miembros del directorio que con posterioridad a su nombramiento cayeren en algunos de estos impedimentos, cesarán en sus funciones y serán reemplazados de inmediato.

Art. 10. — El directorio tendrá todas las facultades y atribuciones requeridas para el cumplimiento integral de la función que se le confiere, correspondiéndole en especial:

- a) Realizar en los términos del artículo 1º, el estudio, exploración, cateo, explotación y comercialización de todos los minerales existentes en la zona delimitada por el artículo 4º, a cuyo fin podrá ejecutar y ejercer los actos y funciones establecidas en el artículo 3º;
  - b) Conferir poderes generales y especiales y revocarlos;
  - c) Disponer la organización interna de la empresa y reglamentar y aprobar las normas complementarias del régimen de contratación de obras y servicios, adquisiciones, etcétera;
  - d) Dictar el reglamento interno de la empresa, con sujeción a las disposiciones de esta ley y del estatuto orgánico que, a propuesta del directorio, apruebe el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, regirá el estatuto orgánico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en todo cuanto resulte aplicable;
  - e) Nombrar, contratar, promover, suspender, aceptar renunciaciones y remover al personal superior, administrativo y técnico.
- En cuanto al personal inferior, esas mismas facultades competirán al superintendente o gerente general de la empresa;
- f) Preparar anualmente el plan de acción a cumplir durante el o los ejercicios económicos siguientes, acompañando una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar por la empresa y un presupuesto de explotación que contemple en forma integral y en grandes rubros, los recursos y erogaciones que han de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, así como la estimación de los probables resultados a obtener.

El plan de acción y el presupuesto de explotación deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo nacional, dando cuenta de ello al Congreso. Si por cualquier circunstancia no lo fuere antes de iniciarse el ejercicio económico a que se refiere, continuará aplicándose el presupuesto anterior;

- g) Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, de los créditos parciales que constituyen los rubros principales, sin alterar el monto, de éstos, dando cuenta al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o per-

mitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros;

- h) Elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos y al finalizar cada ejercicio un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas;
- i) Elevar anualmente a los poderes ejecutivos de la Nación y de la provincia de Catamarca y al consejo superior de la Universidad Nacional de Tucumán, una memoria descriptiva y comparativa de la gestión realizada en relación con lo previsto en el plan de acción;
- j) Fijar a propuesta del presidente la retribución extraordinaria que deba darse a los funcionarios, empleados y obreros en razón de su eficacia en el trabajo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte, y dentro de un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas;
- k) Crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos;
- l) Crear en la provincia de Catamarca un instituto de investigaciones mineras y una escuela de minería, a fin de promover investigaciones mineras y metalúrgicas y la formación de personal especializado.

Art. 11.—Corresponde al presidente del directorio:

- a) Tener la representación legal y administrativa de la empresa;
- b) Girar sobre los fondos de la empresa, debiendo su firma ser acompañada por la del contador y tesorero, o por la del funcionario autorizado para ello por el directorio;
- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio y cumplir y hacer cumplir sus resoluciones;
- d) Resolver por sí todos aquellos asuntos para los cuales esté autorizado por el reglamento interno que dicte el directorio, como así también aquellos otros que están reservados a este último cuando razones de extrema urgencia así lo exijan, con cargo de dar cuenta a dicho cuerpo, a cuyo efecto deberá citarlo de inmediato.

Art. 12.—La provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, podrán designar uno o más delegados cuyas atribuciones serán las siguientes:

- a) Examinar los libros y documentos de la empresa y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie;
- b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere el inciso f) del artículo 10.

Estos delegados serán retribuidos por la parte a la que representen y ejercerán sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la explotación. Las autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de los delegados, las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 13.—En sus relaciones con terceros YMAD se registrará por el derecho privado. A los efectos de este artículo se considerarán terceros todas las personas de existencia visible o jurídica, constituidas

éstas por capitales privados o mixtos y las dependencias o empresas del Estado nacional, provincial o municipal. En sus relaciones con la provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentaciones vigentes. En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional, actuará por intermedio de la Secretaría de Industria y Minería y del Ministerio de Economía, siéndole, en ese aspecto, aplicables las normas de derecho público.

Art. 14.—YMAD efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, mediante la licitación pública, licitación privada, concurso privado de precios, y contratación directa, según las normas que se establezcan en su reglamento interno. Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 15.—Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos moneda nacional). Además, le otorgará en préstamo, sin interés, reembolsable en diez cuotas anuales iguales a contar del cuarto año de su constitución hasta la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional).

Art. 16.—Independientemente de los recursos ordinarios provenientes de sus actividades, YMAD podrá hacer uso del crédito, hasta el monto que lo autorice su presupuesto, para completar o facilitar la financiación de las mismas, a cuyo efecto podrá:

- a) Solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales, mixtas o privadas, y recurrir a cualquiera otra forma de crédito o financiación;
- b) Recibir contribuciones del Estado nacional reintegrables o no. En este último caso el importe de la contribución importará aumento del capital de la empresa.

Art. 17.—A los efectos de la fiscalización del manejo de los fondos y ejecución del presupuesto, el Tribunal de Cuentas de la Nación podrá destacar periódicamente uno o más auditores al solo efecto de:

- a) Verificar la correcta aplicación del plan de cuentas, la veracidad, exactitud y simultaneidad de las registraciones y la oportuna presentación de los estados periódicos;
- b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan y si encuadran dentro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados. Los auditores propiciarán, ante el Tribunal de Cuentas y a efectos de que el mismo resuelva conforme con las atribuciones que le acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Art. 18.—Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

- a) El sesenta por ciento (60 %) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al cincuenta por ciento (50 %) del total general, destinándose el diez por

ciento (10 %) restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;

- b) El cuarenta por ciento (40 %) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
- c) Una vez cumplido los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %) se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.

Art. 19. — YMAD deberá:

- a) Instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio, cuya capacidad mínima será de doscientos cincuenta toneladas por día, en un plazo máximo de siete (7) años a partir de su constitución y realizar el desarrollo de una exploración adecuada;
- b) Mantener una producción relacionada con la capacidad de la planta.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería.

Art. 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa, sea por haberse declarado la caducidad de la concesión o por no estar integrada la mayoría del directorio a los dos meses de caducados los mandatos de los miembros respectivos o por alguna otra razón de similar importancia que demuestre fehacientemente la imposibilidad de continuar con el giro de aquélla. En tales casos el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir, respecto a los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación, que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa, que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro Nacional.

El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Art. 21. — Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería.

Art. 22. — En cualquier caso de caducidad de la concesión los yacimientos quedarán reservados para el Estado, por el término de un año.

Art. 23. — En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado.

Art. 24. — Derógase el decreto ley 270/58.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Emilio Donato del Carril. — Alberto V. Tedín. — Ricardo Lumí.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Señor presidente, viene a esta Cámara un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y con sanción del Honorable Senado, por el cual se crea un ente denominado Yacimientos Mineros de Agua de Donisio, que tendrá a su cargo el cateo, exploración y explotación de minerales de cualquier categoría, como asimismo la comercialización e industrialización de sus productos en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de Catamarca.

Dicho proyecto de ley deroga el decreto 270 de 1958, por el cual se faculta a la Universidad de Tucumán para llevar a cabo tales tareas.

El tratamiento de este proyecto se justifica por las siguientes razones. Además de la imperiosa necesidad de poner en marcha estos trabajos, urge sancionar esta ley en este período legislativo, por cuanto el 31 de diciembre próximo vence el plazo fijado por el decreto-ley 17.356/57, que declaró zona de reserva la del yacimiento minero de Farallón Negro. Si antes de esta fecha no queda sancionada la ley, por cuyo artículo 23 se prorroga la reserva, los yacimientos podrán ser solicitados legalmente en concesión por cualquier particular, en base a disposiciones legales vigentes; y por tal motivo todo lo hasta ahora realizado por los organismos estatales, como ser investigación y exploración para determinar la real importancia de esa zona minera, pasará quizás a beneficiar a patrimonios de particulares cuando no a capitales extranjeros.

Dicho esto, y como paso previo al análisis de esta iniciativa, conviene recordar la forma cómo se ha trabajado en la redacción de este proyecto, que por razones de tiempo y una exigencia de orden legal nos obliga a tratarlo con premura.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Jorge Raúl Decavi.

Sr. Peralta. — El derecho que tiene la provincia de Catamarca sobre los yacimientos es inquestionable. El artículo 7 del Código de Minería dice: «Las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren».

Las minas de Agua de Donisio son bienes privados de la provincia de Catamarca, desde que se encuentran en su territorio. Habiendo la universidad realizado trabajos de investigación y dado el interés puesto por las autoridades universitarias de participar en todas las tareas, se convino —y sin que ello modifique en absoluto el derecho— como un acto de justicia, compartir las ganancias líquidas con la Universidad de Tucumán —artículo 18— y las demás universidades del Estado.

Como la Nación debía financiar esta empresa, se acordó con muy buen criterio, que las partes interesadas, es decir, Catamarca y la Nación,

a través de las universidades, trabajaran de común acuerdo en la redacción de este proyecto que hoy tratamos.

Así fue como se firmó el acta de Farallón Negro que fue ratificado por ley de la provincia número 1695 y por el Consejo Superior de la Universidad de Tucumán.

En dicha acta se estableció la creación de un organismo formado por cinco miembros: dos por Catamarca, dos por Tucumán y la presidencia ejercida por la Nación; que de las utilidades netas y líquidas que arrojen los balances se distribuirán a razón del 60 por ciento para Catamarca, 40 por ciento para la Universidad de Tucumán; ayudará Catamarca también con un 10 por ciento de lo que reciba para que se construya la Ciudad Universitaria de Tucumán, o hasta el 7 de junio de 1968, si ésta no se terminare antes. Del porcentaje que le corresponda a la universidad, o sea el 40 por ciento, la mitad pasará al fondo nacional que se distribuirá entre las universidades del Estado. Además, se estipuló que la sede del organismo será en Catamarca.

Es interesante puntualizar estos pasos que se dieron para determinar el carácter jurídico de la institución que se crea.

Sobre el yacimiento auromanganífero de Farallón Negro, se viene hablando desde hace mucho tiempo. El que más se ha preocupado de él, sin ser el único, es el doctor Abel Peirano, para quien, como catamarqueño, rindo mi mejor homenaje, porque con su esfuerzo y sacrificio desinteresado, como muchos otros que de este problema se ocuparon, pusieron de relieve la importancia de las minas existentes y consiguieron interesar al gobierno quien, en reiteradas veces, dictó normas declarando zona de reserva fiscal a aquella región, hasta que hoy, los hombres surgidos de los comicios del 23 de febrero pasado, en el deseo de ser ejecutivos y concretar las supremas aspiraciones del pueblo que nos votó, damos el instrumento legal correspondiente que será como la herramienta primera con que se empezará a desentrañar del corazón de los cerros catamarqueños una incalculable riqueza que beneficiará a esa provincia injustamente postergada en sus realizaciones, a la Universidad de Tucumán y a todas las universidades del país, como lo voy a demostrar a través de mi exposición.

El solo hecho de saber que las universidades del Estado, la provincia de Catamarca y la Nación, son las destinatarias de esa riqueza, como así también las responsables del buen éxito de la empresa y que con esta ley todas las puertas quedan cerradas a una posible entrega a fuerzas extrañas a la esencia de la nacionalidad argentina, pone de manifiesto que con el paso que damos estamos defendiendo los intereses nacionales y colocando la riqueza de nuestro suelo al servicio de la colectividad.

Señor presidente: en todas las grandes empresas que el Estado encara, donde debe hacer erogaciones de fondos, debemos preguntarnos:

primero, si económicamente conviene a los intereses del país; segundo, quiénes son en definitiva los beneficiarios; tercero, si no se lesiona algún derecho fundamental.

A este respecto tenemos antecedentes de sobra que justifican desde el punto de vista económico la creación del ente interestatal que propicia esta iniciativa.

El ingeniero Alberto Monchamblón, designado por el Poder Ejecutivo, hizo los estudios técnicos que son dignos de que esta Cámara los conozca.

Dice el ingeniero Monchamblón: Hasta la fecha se han realizado distintos trabajos de exploración y explotación y además se han construido diversas instalaciones para el laboreo del material extraído: oro, plata y manganeso. Intervinieron en los trabajos Fabricaciones Militares, la Dirección de Minería, la Universidad de Tucumán y la provincia de Catamarca.

Lo más importante de todo y que justifica la creación del ente a que se refiere esta ley, es el manganeso.

La producción de manganeso proveniente de Farallón Negro, según se calcula para la posible extracción que se haga, será íntegramente absorbida por la planta siderúrgica de San Nicolás; esto asegura el mercado. En efecto. San Nicolás, en su primera etapa, empleará alrededor de 12 mil toneladas finas anuales, de las cuales Farallón Negro proveerá del 65 al 70 por ciento, es decir, alrededor de las 7.500 toneladas finas de manganeso, aproximadamente. Esto también significa que no habrá problemas de competencia, pues queda margen suficiente para la producción de otras minas. Además, en lo que a época inicial de explotación se refiere, debe consignarse que en el año 1961, de llevarse a cabo ambas explotaciones, Farallón Negro producirá manganeso tanto como arrabio San Nicolás.

Respecto al precio del manganeso, conforme a cálculos de costo de explotación, separación y manipuleo de mineral, flete, etcétera, el mineral podrá entregarse en San Nicolás a un valor similar al cotizado sobre vapor en el mismo punto, con la consiguiente economía de divisas.

También se han hecho estudios relativos al valor de los minerales a extraer. Según dichos estudios se llega a un producto auromanganesífero con las siguientes leyes: 10 gramos de oro por tonelada y un 11 por ciento de manganeso, o sea 110 kilogramos; calculando a precios normales de 50 pesos el gramo de oro y a 5,30 pesos el kilogramo de manganeso, se llega a una recuperación de 1.083 pesos por tonelada extraída. Si reconocemos una capacidad de producción de 75.000 toneladas brutas, llegamos a un valor de producción anual del orden de los 81.225.000 pesos. Ahora bien, frente a este valor de la producción en pesos calculamos las inversiones que habrán de hacerse para lograrla y estimamos en 700.000 dólares los compresores, motocompresores, guinches, equipo básico de concentración, martillos

numáticos, etcétera. Es decir, bienes que no pueden adquirirse en el país. Además, instalaciones, elementos para fuerza motriz, talleres, caminos, campamento, vehículos, instalaciones de agua y bombeo, capital evolutivo para tres meses, etcétera, en 75.000.000 de pesos. Vemos así que económicamente es un rendimiento teórico, es verdad, pero previsiblemente tan ajustado a la realidad, que no deja lugar a dudas respecto a los resultados de la explotación. Queda con esto demostrado que desde el punto de vista económico se justifica la inversión que se hará.

Hemos dicho que los beneficiarios de esta empresa son Catamarca, las universidades del Estado e, indirectamente, la Nación.

Acá está la gran bondad de este paso que damos. Catamarca es una de las provincias que por su configuración morfológica está destinada a depender fundamentalmente de la riqueza de sus montañas, que ocupan el 77 por ciento de su superficie territorial. No puede en ella esperarse ninguna transformación fundamental en base a la actividad agropecuaria, ya que se riega el uno por mil de su territorio mediante cursos de agua no regulados; ni aun con obras de construcción de embalses se alcanzaría a duplicar ese porcentaje.

El presupuesto de la provincia es de ciento diez millones de pesos, de los cuales setenta millones son consumidos por los sueldos de los empleados públicos. Esto muestra el panorama desastroso de nuestra economía. Catamarca no será verdaderamente autónoma mientras no se creen las condiciones básicas para su desarrollo económico, mientras no pueda construir su economía independientemente, mientras viva de la ayuda de la Nación; se sucederán las intervenciones federales, que son verdaderas plagas que lastiman el sentimiento provincial y federal.

La Universidad también será autónoma en la medida en que tenga sus propios recursos. La Nación se beneficiará fundamentalmente, porque mermarán sensiblemente los gastos que anualmente realiza de rentas generales para mantener la Universidad, y podrá destinar esos recursos en otras cosas de importancia. También se ahorrarán divisas.

En cuanto a los derechos en juego, debemos decir que de acuerdo con el Código de Minería, artículo 79, las minas son bienes de la provincia de Catamarca. Ella, de acuerdo con el artículo 49 de este proyecto de ley, queda en libertad de acción para conceder las minas en una extensión mayor de la especificada en el artículo 27. En caso de que, por las razones dadas en el Código y en esta ley, se produzca la caducidad de la concesión, las minas volverán a Catamarca, porque la provincia recuperará sus derechos.

Hechas estas consideraciones de índole general, corresponde que analice en particular los artículos fundamentales del proyecto.

Pero antes debo decir que el ente minero que por esta ley se crea no es propiamente un ente autárquico, porque éstas son instituciones des-

centralizadas de la Nación, provincia o municipio, quienes en cada caso ejercen el contralor de los actos. Aquí se trata de una institución sui géneris en la que no se dan los elementos y condiciones comunes a las instituciones autárquicas. Por una parte está la provincia, que por el acta del Farallón Negro, ratificada por ley 1.695 de la provincia, se compromete a otorgar la concesión al ente que se creará por ley del Congreso, siempre que éste la libere de la obligación establecida en el artículo 27 del Código de Minería, que hace referencia al número de pertenencias que puede conceder. Por el otro lado está la Nación a través de la Universidad, que aporta el dinero para que se realicen los trabajos.

Ambos estados, Nación y provincia, ejercen el contralor de los actos que se realizan, además de participar en la integración del directorio.

Pues bien. A mi juicio no es realmente una entidad autárquica, sino más bien un ente estatal con características propias, donde una de las partes, la Nación, está representada por la Universidad de Tucumán, que es el ente autárquico.

Pasando al análisis de los artículos, diré que por el artículo 19 se crea el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, y se establece el objeto del mismo, que es el de realizar cateos, exploración y explotación de minerales de cualquier categoría que se encuentren en la zona minera determinada en el artículo 49.

El artículo 29 se refiere al domicilio del ente, que será Catamarca. El motivo de esta cláusula es el siguiente: se ha querido con ella que la mayor parte de las actividades se realicen dentro del territorio de la provincia, para que haya así mayores fuentes de trabajo en ella, poniendo en esa forma un dique de contención al éxodo de catamarqueños que por falta de ocupación abandonan su patria chica, creando problemas en las grandes urbes mientras el campo cada día se va desolando más.

El artículo 39 se refiere a la capacidad de este organismo, que es la de las personas jurídicas de derecho privado.

Por el artículo 49 se establece una excepción al Código de Minería en el sentido de que se deja en libertad a la provincia de Catamarca de la obligación establecida en el artículo 79 de ese Código, posibilitando que se otorgue la concesión de los yacimientos por un mayor número de pertenencias del prescrito. Cualquier planteo que pudiera hacerse por temor que se tenga acerca de esta cláusula, se desvanecerá frente a la garantía que consigna el artículo 59 de este proyecto de ley, que dice: «Yacimientos Mineros Agua de Dionisio no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 49, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas

mixtas, nacionales o provinciales.» Como se ve, todos los recaudos están tomados en defensa de esta riqueza tan necesaria para esta etapa de industrialización de nuestro país.

El artículo 6º se refiere a la formación del directorio y duración del mismo, cuyos miembros serán reelegibles e inamovibles en sus cargos, sin perjuicio de ser removidos por haber caído en las inhabilidades establecidas en el artículo 9º o por inconducta, negligencia en el cargo o mala administración, previo sumario.

El artículo 7º se refiere al caso de que se denunciara que tres o más miembros del directorio se hallen incurso en algunas de las causales previstas en el artículo 6º. En ese supuesto, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio. Probada la denuncia, caducarán en sus cargos los directores, pero el interventor que designe la Nación en ninguna forma podrá asumir las facultades que tienen los directores.

El artículo 10 se refiere a las facultades y atribuciones del directorio. Su redacción clara me libera de hacer el comentario de los requisitos establecidos por el artículo. Unicamente señalaré que por el inciso d), el directorio debe dictar el reglamento interno de la empresa, redactar el estatuto orgánico y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación.

A este respecto, debo hacer una observación. La ley 13.653, sobre régimen de funcionamiento de empresas del Estado, se refiere únicamente a las empresas estatales. En este caso del yacimiento minero de Agua de Dionisio, hemos dicho que está como parte la provincia de Catamarca; no obstante ello, se ha pensado en incluir una cláusula como una garantía y como una seguridad.

Hasta tanto se dicte el estatuto orgánico que regirá a este organismo, será de aplicación el estatuto orgánico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en todo cuanto resulte aplicable.

Cabe puntualizar que en cuanto al aspecto financiero esta ley establece todos los recaudos para permitir su contralor. Así, el plan de acción y el presupuesto de explotación deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo dando cuenta al Congreso; debe elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos, y al finalizar cada ejercicio un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas. Además, anualmente el directorio debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, a la provincia de Catamarca y al Consejo Superior de la Universidad, una memoria descriptiva y comparativa de las gestiones realizadas en relación con lo previsto en el plan de acción. Por otra parte, Catamarca y la Universidad de Tucumán pueden nombrar uno o más delegados para que examinen los libros y documentos; y fiscalicen el cumplimiento del plan de acción.

El artículo 13 establece claramente a qué norma jurídica ha de ajustarse la empresa en sus relaciones con terceros, con la provincia de Ca-

tamarca, así como las de índole administrativa con respecto al Poder Ejecutivo de la Nación.

Paralela a la capacidad jurídica que le acuerda el artículo tercero, se otorga a esta empresa autarquía financiera a través de los artículos 15 y 16. Es evidente la necesidad de esta norma para el desarrollo integral de este organismo, que de otro modo se vería trabado en su acción. Dar libertad no importa en modo alguno el otorgamiento de una facultad discrecional que pudiera comprometer el destino de la empresa.

El artículo 17 asegura que a los efectos del manejo de fondos y ejecución del presupuesto, la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, que podrá destacar periódicamente a sus auditores, verificará y analizará la ejecución del plan de cuentas y de los actos realizados por el directorio. Estas facultades son amplias y representan una garantía eficiente, digna de ser recalcada.

Señor presidente: además de esta bondades, en cuanto se refiere a la ayuda a las universidades estatales, debemos decir también que por esta ley el directorio se compromete a crear una escuela de minería y un instituto de investigaciones mineras. Para que los señores diputados conozcan mejor este aspecto, voy a leer el inciso l) del artículo 10, que dice: «Crear en la provincia de Catamarca un instituto de investigaciones mineras y una escuela de minería a fin de promover investigaciones mineras y metalúrgicas y la formación de personal especializado.»

Con esta ley dejamos sentado un gran precedente en lo que se refiere a política minera, en muchas provincias de nuestro país, postergadas injustamente, porque no pueden conseguir su independencia económica en base a actividades agropecuarias.

Es necesario que los organismos estatales den los elementos para que encaren realmente una verdadera explotación minera.

Este proyecto de ley cuya aprobación solicito, posibilitará a Catamarca iniciar el gran camino hacia el progreso futuro; y además, no obstante ser provincia pobre, dará un gran ejemplo al compartir su riqueza con todas las universidades del Estado. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Verdaguer.** — Nadie más interesado que el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo para lograr, por todos los medios, que esta importantísima fuente de recursos de la Nación no quede fuera de su control.

En razón del vencimiento que tendrá lugar a fin de año, en lo relativo a las reservas, si no se cumplieran los debidos requisitos, se abriría la posibilidad de que esa incalculable riqueza pasara a ser del dominio público y explotación privada.

Nosotros comprendemos la importancia extraordinaria que tienen las minas de Farallón; tan lo comprendemos que antes de iniciar el período legislativo habíamos presentado en esta

Cámara un proyecto de resolución por el que solicitábamos una abundantísima información.

Por los fundamentos que en forma breve trataré de expresar, creo que este asunto no ha sido suficientemente discutido, que debe pasar a comisión para su estudio y luego ser incluido en el periodo de sesiones extraordinarias. Hago esta afirmación basado en lo siguiente: en primer lugar, he pedido más de cuatro veces en esta Honorable Cámara que discutiéramos la orden del día 71, en la que figura en sus antecedentes un pedido de informes al Ejecutivo que contenía catorce puntos en lo que se refiere a la cuestión del Farallón Negro. A pesar de haber formulado con insistencia esos pedidos para el tratamiento de la orden del día, no fue aceptado mi pedido, y por lo tanto no tuvo apoyo ni el proyecto de resolución de catorce puntos informativos, ni el breve cuestionario de tres puntos a que había quedado reducido el proyecto original en la comisión. Ayer solicité nuevamente que se incluyera este pedido de informes; se me dijo que se haría hoy; y en la sesión de la fecha volví a hacer el pedido, y aunque se me dio la misma contestación, no ha sido incluido en el plan de labor. Esa solicitud de informes, especialmente mi proyecto, era necesaria para poder discutir con conocimiento esta cuestión que se nos trae en este último día de sesiones. Se trata de un asunto que implica hondos problemas de orden moral, jurídicos y constitucionales, así como cuestiones que hacen a la economía de la provincia en juego y cuestiones relacionadas con el Código de Minería, que no se contemplan. Tampoco se contemplan otros aspectos de la legislación nacional que hay que tener en cuenta y graves cuestiones que hacen a las finanzas de la Nación.

Pregunto a la comisión si está en condiciones de informar categóricamente sobre una serie de denuncias que tenemos y que en su oportunidad les daremos publicidad.

No sólo Farallón Negro es la mina en producción sino que, como bien se ha dicho en la otra Cámara, denominando todos los yacimientos con la designación de «Aguas de Dionisio», existen a su alrededor otros yacimientos de igual o de mayor valor.

Entiendo que la comisión no puede responder porque no ha sido convocada para el estudio exhaustivo de tal problema.

En el artículo 4º del proyecto votado por la Cámara de Senadores —que recién esta tarde, a último momento, he logrado hacer llegar a mi banca— se habla de una superficie minera de 343 kilómetros cuadrados, en tanto que un informe estrictamente confidencial del Ministerio del Interior, en copia fotográfica que obra en mi poder nos trae abundantísima información, nos dice que la superficie minera calculada es de 360 kilómetros cuadrados.

¿Conoce acaso la comisión el mineral calculado? ¿Conoce acaso la comisión la cantidad de mineral que se ha movido y removido? ¿Co-

noce sus reservas? ¿Ha tomado contacto con su zona? ¿Sabe que el rector de la Universidad de Tucumán fue amenazado de muerte por este asunto? ¿Conoce y puede informar con toda claridad —porque el proyecto sancionado por el Senado no lo dice— con quién se negociará el oro que se extraiga de la mina; si el ente que se crea va a tener derecho de negociar con el extranjero ese oro o podrá negociarlo libremente en el país? Lo razonable sería que ingresara al país en este momento de angustia. A eso iba nuestra iniciativa; ése era el principio de nuestro propósito: pedir a la provincia de Catamarca y de Tucumán —sin desconocer que es apremiante la situación de la ciudad universitaria y los problemas provinciales— que hicieran el sacrificio patriota de facilitar todo el producido que se obtenga en Farallón Negro, y entregarlo en préstamo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales para que YPF, con esos recursos de oro, plata y manganeso, no tenga necesidad de hacer ninguna clase de contratos con el imperialismo extranjero.

La comisión no puede responder porque no sabe nada de eso, porque el Ejecutivo se esmera en tapar una cuestión que nosotros sabemos positivamente que trae cuestiones de orden moral gravísimas, porque Farallón Negro y otras minas de la zona de Aguas de Dionisio, desde hace tiempo, desde la época del régimen depuesto, están siendo explotadas y no ha ingresado al tesoro nacional ni un gramo de oro, ni de plata, ni de manganeso.

¿Quién controlará la producción de oro? El proyecto que viene en revisión del Senado nada ha previsto acerca de cómo se va a controlar la producción; deja en manos del ente autárquico, en forma velada, imprecisa, cómo se va a realizar la explotación.

Tampoco dice nada que ocurre y qué ha ocurrido con lo ya explotado; si hay reservas, si se va a ingresar algo. No nos dice nada sobre la producción actual de mineral que realiza en razón de un préstamo de equipo que realiza en razón de un préstamo de equipo experimental hecho por la Universidad de Tucumán para la explotación. Nada dice si esas maquinarias y materiales pasan directamente al ente autárquico o si deben ser devueltas a la provincia de Tucumán. Nada nos dice acerca del problema existente entre Tucumán y Catamarca; lo resuelve en forma superficial. Es un punto que debemos estudiar muy detenidamente porque hace a la economía de Catamarca y de Tucumán. El problema catamarqueño interesa a todo su pueblo, ya que en su hora hubo un verdadero levantamiento.

Tenemos sobre nuestra banca, para el momento del debate, toda la documentación que podemos aportar en este asunto. No puede traerse a la consideración de la Cámara, a última hora, un asunto como éste sin el estudio serio, porque interesa a todo el país. Por lo tanto

pido en nombre de mi bloque que nuevamente el asunto pase a comisión, y que luego, si el Ejecutivo desea que esto no pase al dominio privado, que lo demuestre con los hechos incluyendo este asunto en las sesiones extraordinarias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Decavi).—Para referirse a la moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Correa.**—Solicito del señor diputado por la Capital quiera retirar su moción de orden a fin de poder contestar las apreciaciones que acaba de hacer y dar las informaciones del caso.

**Sr. Verdaguer.**—Cuántas más informaciones al respecto vengan, mejor; pero este es un asunto de reconocida importancia que no podemos dejar librado al triunfo de la tesis que pueda sostener el diputado que va a hablar ni al triunfo de la tesis que pueda sostener yo. Es un asunto demasiado serio para dejarlo librado a la discusión de quién tiene razón. El señor diputado podrá tener o no argumentos extraordinarios que echen por tierra lo que yo he dicho, pero la seriedad con que debe debatirse este asunto exige que vuelva a comisión.

**Sr. Fuertes.**—El señor diputado puede dejar transitoriamente sin efecto su moción.

**Sr. Verdaguer.**—No tengo inconveniente.

**Sr. Presidente** (Decavi).—Habiendo diferido su moción de orden el señor diputado por la Capital, tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Correa.**—En primer lugar, como representante de la provincia de Catamarca considero que no se puede relegar un interés legítimo, como el que contempla la creación de este yacimiento, por motivos que carecen casi en su totalidad de seriedad y veracidad.

**Sr. Verdaguer.**—No le admito al señor diputado que se exprese en esa forma.

**Sr. Correa.**—Quiero decir que este proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado, supera todos y cada uno de los hechos a que hace mención en su proyecto de resolución el señor diputado por la Capital.

En cuanto al aspecto legal a que hace alusión, no precisando específicamente cuáles son las objeciones, voy a hacer un breve análisis sobre la disposición 4ª del proyecto mencionado.

En relación a la pregunta de a quién pertenecen originariamente las minas, ha respondido uniformemente la doctrina en dos posiciones que se agrupan según se separe referencia el dominio originario del derivado de las mismas. Así, en la primera encontramos, entre los que no separan el dominio originario del derivado, al sistema de la accesión. En la segunda, entre los que separan efectivamente el dominio originario del derivado, encontramos, aparte del sistema de la ocupación, del *res nullius*, al sistema regalista. Es este sistema regalista el que está adoptado en nuestro Código de Minería conforme a la disposición del artículo 7º, en concor-

dancia con el 2.342, inciso 2º, del Código Civil, por el que se establece en forma clara que las minas pertenecen al dominio privado, conforme al lugar en que se encuentren. De tal manera que es improcedente cualquier argumentación legal o constitucional en contrario, por cuanto las provincias tienen la facultad de explotar por sí o conceder a particulares.

**Sr. Pozzio.**—Es el criterio del señor diputado.

**Sr. Fuertes.**—Hay que estudiar. Es una falta de responsabilidad tratar estos problemas de esta manera.

**Sr. Correa.**—Es mi punto de vista, señor diputado. Las disposiciones del Código de Minería conforme la facultad otorgada por el artículo 67 inciso 11 es a los fines de unificar la legislación para que ésta no sea, al decir del ilustre Gorostiaga, un laberinto de graves consecuencias. Por eso considero que es procedente esta excepción que establece el artículo 4º referente al número de pertenencias.

Por otra parte, por encima de cualquier problema de aspecto legal está la ratificación que hace la legislatura de la provincia de Catamarca al acta que es base y fundamento de este proyecto de ley.

Con el fin de aclarar los aspectos que imprecisamente ha enunciado el señor diputado por la Capital, quiero ratificar que no puede existir ningún otro interés más legítimo que el de la provincia, el cual ha sido contemplado por sus organismos naturales y representativos.

Por eso me voy a oponer a la moción de orden del señor diputado por la Capital. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Decavi).—Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Peralta.**—Quiero agregar a las palabras del diputado Correa lo siguiente. Creo que no se puede manifestar en esta Cámara que en este proyecto hay una cuestión moral de por medio, como lo ha expresado el señor diputado por la Capital, pues intervienen todas las universidades del país. La Universidad de Tucumán forma parte del directorio con dos miembros, y esa universidad es un ente superior de cultura que tanto han defendido los señores diputados en sesiones pasadas. Todas las universidades del país, por esta ley, tienen las puertas abiertas para controlar todo lo que se realiza en esa entidad.

Además, ha manifestado que no se sabe qué se hace del oro que se extrae de ahí. Los trabajos que se hicieron en la mina de Farallón Negro los realizó la Universidad de Tucumán a título de investigación. Además, quiero decir que no se puede dudar de esto, por cuanto el 40 por ciento de las ganancias líquidas y netas pasará a la Universidad de Tucumán, la que, además de construir la ciudad universitaria, entregará el 50 por ciento para el fondo de todas las universidades del país. En ese aspecto, cuando están de por medio las universidades de

nuestro país, no voy a admitir de ningún diputado que se dude del procedimiento seguido. Quiero también aclarar el punto de vista de los derechos que están en juego.

Catamarca, por el artículo 7º del Código de Minería, tiene derecho sobre esta mina, y puede conceder la explotación; en este caso, lo hace a Yacimientos Minerales de Agua de Dionisio, donde la provincia de Catamarca participa en el directorio con dos representantes y la Nación tiene la presidencia. En caso de que ese ente fracasara por algún motivo, los derechos vuelven a la provincia de Catamarca.

Este juego, al que se lo quiere empañar, es perfectamente claro. No hay posibilidad de que esas riquezas, que son tan necesarias para encarar la etapa de la industrialización del país, pasen a manos privadas o a capitales extranjeros, que es lo que debemos evitar.

Lo que pasa, y debe saberlo la Cámara, es que el proyecto de resolución del señor diputado Verdaguer no responde más que al resentimiento del interventor Parodi, que estuvo en Catamarca y quiso entregar la mina, por lo que contra él se levantó todo el pueblo de la provincia. (Aplausos.)

**Sr. Marini.** — Es totalmente al revés.

**Sr. Verdaguer.** — Resentidos son los que entregan el petróleo.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

**Sr. Peralta.** — El señor diputado por la Capital presentó un proyecto de resolución, en el que pedía el nombramiento de una comisión que investigara si en la provincia de Catamarca hay un departamento que se llama Belén, y si en ese departamento hay un distrito que se llama Hualfin, y si en ese distrito hay una mina. Y se permite hacer un cuestionario tipo escuela primaria. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está el resentimiento de aquel interventor de Catamarca, provincia que defendiendo su legítimo patrimonio, con la ayuda de la Confederación General del Trabajo, de los estudiantes y del pueblo todo, se levantó para echarlo. Esa es la mejor forma de defender nuestro federalismo.

**Sr. Bernasconi.** — ¿Por que le teme a la investigación?

**Sr. Peralta.** — Hubo un mal entendido con la Universidad de Tucumán. Todo quedó salvado porque los representantes de la Universidad de Tucumán, juntamente con los representantes de Catamarca y del gobierno nacional, han elaborado este proyecto.

**Sr. López Aguirre.** — Que no conoce casi nadie en la Cámara: recién ha entrado.

**Sr. Peralta.** — Dije ya que la necesidad de que la Cámara sancione el proyecto en este período se debe a exigencias de orden legal. He sido claro: el 31 de diciembre próximo vence el plazo fijado por el decreto ley 17.356, que declaró zona de reserva la del yacimiento mine-ro de Farallón Negro.

**Sr. López Aguirre.** — ¿No se puede tratar el proyecto en sesiones extraordinarias?

**Sr. Peralta.** — Frente a esto y a la vehemencia del señor diputado, respondo que si no se sanciona la ley en este período, el 1º de enero cualquier particular o cualquier empresa extranjera se puede presentar a pedir la mina, y no se le podría negar. Eso es sospechoso.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Pozzio.** — Señor presidente: en primer lugar manifiesto que si algo sospechoso puede haber en este asunto, no está de parte de la bancada de la Unión Cívica Radical del Pueblo, sino en la forma subrepticia como se quiere tratar este asunto. Con esto no hago una imputación: es una réplica lógica a la equivocada información del señor diputado preopinante.

Soy un hombre que tengo mucha tolerancia en el tratamiento de las leyes y declaraciones que está haciendo la Cámara en estos últimos días, porque el cúmulo del trabajo desordena un poco la tarea. En todos los asuntos en que pueda existir una gran responsabilidad, he sido curioso por conocer los proyectos.

Cuando se anunció el tratamiento del que estamos considerando, que no se leyó —es decir que ni la Cámara ha tenido conocimiento de él de viva voz— me acerqué a la Presidencia para verlo y saber cuál debía ser mi voto en su oportunidad.

**Sr. Presidente (Decavi).** — La Secretaría se disponía a dar lectura del despacho, pero por razones de economía de tiempo se creyó conveniente dejarlo para después de terminado el informe.

**Sr. Pozzio.** — No hago un cargo a la Presidencia.

Después de leer el proyecto, manifesté a mis compañeros de bancada que, en el caso de que se tratara este asunto, iba a dejar a salvo mi voto en contra, no por lo que significara la estructuración en sí, sino por la forma en que iba a tratarse. Veía que se producían rozamientos de tipo constitucional que requerían el estudio exhaustivo de la comisión respectiva. Lo manifesté a los compañeros de bancada, que pueden avalar esta afirmación. Las palabras posteriores del señor diputado Verdaguer me afirman en esa posición.

Evidentemente, no se puede tratar este asunto en la forma que ha sido traído a la Cámara. Advierto a los señores diputados que no entro al fondo del asunto y no valoro las manifestaciones que se han hecho hasta este momento sobre el problema. Lo dejaré para la oportunidad del debate, pero para el caso de tratarse dejaré a salvo que voto en contra porque entiendo que es una falta de seriedad tratar el asunto en la forma en que se hace.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Ferreira.** — Quería pedir a la Presidencia que informase si el asunto que se considera tiene despacho de comisión.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Sí, señor diputado; tiene un despacho conjunto de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda.

**Sr. Pozzio.** — No ha pasado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Las propias manifestaciones del señor diputado por Catamarca están demostrando la necesidad de hacer un planteamiento de carácter constitucional; y la Comisión de Asuntos Constitucionales no tiene conocimiento del asunto. El mejor procedimiento es comprometer la palabra de los diputados de la mayoría para que el asunto sea incluido en las sesiones extraordinarias.

**Sr. Ferreira.** — ¿Tiene disidencia el despacho?

**Sr. Presidente (Decavi).** — No, señor diputado.

**Sr. Poitevin.** — Quiere decir que la minoría ha firmado el despacho.

**Sr. Fuertes.** — No ha sido consultada. Yo integro la Comisión de Industria, y no he suscrito ese despacho, cuya firma se me ha requerido en el recinto de la Honorable Cámara.

**Sr. Pologna.** — Solicito que por intermedio de la Secretaría se informe a la Honorable Cámara qué comisiones han considerado el asunto y qué diputados firman el despacho.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Por Secretaría se informará.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El despacho dice:

*Honorable Cámara:*

Las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto ley venido en revisión del Honorable Senado referente a la creación de un ente autárquico llamado Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que ha de tomar a su cargo el estudio, cateo, explotación y comercialización de los minerales existentes en Farallón Negro o Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de las comisiones, 27 de septiembre de 1958.

*Angel Oscar Prece. — Simón Junín. — Juan Arito. — José B. Casás. — Hugo Enrique Castillo. — Jorge Raúl Decavi. — Luis M. Gallo. — Ricardo A. González. — Gilberto L. Heredia. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Horacio María López Ballesteros. — Valentín A. Mercado. — Agustín Rodríguez Araya. — Abraham Salim. — Nabucodonosor Santoni. — Enrique Spangenberg. — Rómulo Vinciguerra.*

**Sr. Poitevin.** — Ahí están las firmas de la minoría.

**Sr. Fuertes.** — Pero no los de la Comisión de Industria.

**Sr. Vinciguerra.** — ¿La Comisión de Presupuesto y Hacienda no forma parte de la Cámara?

**Sr. Poitevin.** — Póngase de acuerdo el señor diputado Fuertes con sus colegas.

**Sr. Zariello.** — Hay hechos nuevos.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Becerra (C. A.)** — Este despacho tendría que venir con la firma de la comisión principal que, para este caso, es la de Industria, y solamente trae la firma de los miembros de la mayoría, debido a que ha sido presentado en ella a último momento, cuando no se podía entrar a estudiar un problema de esa índole.

La Comisión de Industria trató el problema de Farallón Negro a raíz de un proyecto del diputado Verdaguer, que lo convirtió en un pedido de informes que no consideró esta Cámara y que hubiera sido muy importante haberlo tenido en cuenta.

La verdad es que se están tratando en la sesión de hoy una serie de asuntos que tienen despacho conjunto, que son en su mayoría proyectos de obras públicas o de otro tipo que conforma en algo a la posición de los señores diputados y a las provincias que representan. Pero otra cosa es sancionar un proyecto de esta índole, que es sumamente importante.

Como bien dijo el señor diputado Pozzio es un proyecto que debió ir a la Comisión de Industria, a la de Presupuesto y Hacienda y a la de Asuntos Constitucionales, porque hay un problema de derecho constitucional. Sea o no un ente autónomo la Universidad de Tucumán, necesita tener conocimiento del asunto la Comisión de Asuntos Constitucionales, siendo una de las partes contratantes, una provincia. Por otra parte, la urgencia motivada por la fecha de vencimiento de las reservas mineras de la provincia de Catamarca, no es tal. Ya es público que va a ser llamado el Congreso a sesiones extraordinarias, que se realizarían en octubre o noviembre, pero siempre antes de diciembre. Hay, pues, tiempo suficiente para estudiar y tratar ese proyecto, haciendo un análisis serio y responsable de los artículos.

No es cuestión de hacer planteamientos políticos para llevar adelante un proyecto, como ha hecho el señor diputado por Catamarca. El ha tenido tiempo suficiente. El señor diputado quizá lo conozca...

**Sr. Correa.** — Lo conozco perfectamente; el que no lo conoce es usted.

**Sr. Becerra (C. A.).** — Yo confieso que no lo conozco, no podemos conocerlo, si recién se presentó. Por eso no podemos expedirnos con seriedad. El señor diputado ha realizado un estudio. No vengamos con una cosa estudiada de antemano a sorprender a la Cámara, para que nos expidamos en un problema en el que debemos actuar con toda responsabilidad.

**Sr. Carrera.** — No puede expresarse así de un colega.

**Sr. Becerra.** — Si nosotros hubiéramos venido en igualdad de condiciones a tratar este proyecto, no hubiera habido inconvenientes porque

nos habríamos puesto, ellos y nosotros, en comisión en esta Cámara, a estudiarlo.

Es evidente que hemos venido en forma desigual a considerar el proyecto. Por una parte tenemos que improvisar, y no queremos hacerlo porque sería poca responsabilidad de nuestra parte. Además se trae un estudio realizado con lectura de notas.

**Sr. Monte.** — ¿Por qué no leen otros?

— Hablan varios señores diputados a la vez.

**Sr. Becerra (C.A.).** — Quiere decir que el trámite del proyecto en la presente sesión es realmente sorpresivo. Nosotros, como miembros de la comisión, no hemos realizado el estudio correspondiente, porque no ha habido tiempo, razón por la cual los miembros que asistieron a la reunión de comisión no lo han firmado. No puede este proyecto tratarse así, de inmediato, en esta sesión.

No existe razón de urgencia en este caso, porque incluyendo este asunto entre los a considerarse durante las sesiones extraordinarias, dispondremos de tiempo suficiente para estudiarlo con detenimiento.

No creo que una creación como ésta pueda tratarse de un momento a otro. Necesita estudio y responsabilidad. Como tenemos responsabilidad y disponemos del tiempo suficiente para realizar el estudio necesario dentro del término a que se ha referido el señor diputado por Catamarca, esta bancada no va a acompañar con su voto la sanción del proyecto de ley que está a consideración de la Honorable Cámara.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Gómez Machado.** — Evidentemente, las afirmaciones del señor diputado por Córdoba son temerarias. De ninguna manera se quiere sorprender a la Cámara con este proyecto: se trata de un problema que viene debatiéndose en la República desde hace tres o cuatro meses, que ha sido estudiado exhaustivamente con la presencia de técnicos en la comisión del Senado, y que cuenta con despacho de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, con firmas del sector minoritario. De ninguna manera se puede manifestar en este recinto que esta bancada pretende en forma alguna sorprender a la bancada de la minoría.

Pero como nosotros deseamos hacer las cosas acabadamente, voy a hacer la proposición reglamentaria de que la Cámara se constituya en comisión para tratar este proyecto. De esta manera nadie podrá decir que no se trae aquí un despacho que no ha pasado por una determinada comisión.

Traigo la referencia correspondiente al caso de la Corporación Nordpatagónica, que también fue tratado en esta Cámara sin previo paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales, y ninguno de los señores diputados hizo cuestión a ese respecto.

Llamo a la reflexión a los señores diputados para que estudiemos exhaustivamente el pro-

yecto, que tiene antecedentes y que ha sido analizado por técnicos de las comisiones correspondientes.

Por las razones expuestas, propongo concretamente que la Cámara se constituya en comisión.

**Sr. Casella Piñero.** — Entonces no trataremos en este período el artículo 28, que viene en revisión del Honorable Senado.

**Sr. Presidente (Monjardín).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Marini.** — Creo que la forma como está trabajando la Honorable Cámara y la urgencia que existe para sacar asuntos que son de interés público pueden justificar un episodio como el que ha ocurrido hace un instante.

Honradamente, no creo que nadie tenga la intención de sorprender a nadie. Hay motivos de urgencia que, a veces, hacen que algunos de los aspectos de estudio y de consideración hacia los colegas de comisión no puedan cumplirse en su totalidad.

He firmado en esta banca muchos despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que no fueron considerados en la comisión. Pero yo atendía a una parte de lo que corresponde a esa comisión, parte que se refiere exclusivamente a recursos, y si me parecía que esos recursos eran adecuados, subscribía de conformidad el despacho.

Es por una simple casualidad que mi firma no aparece en ese despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; pero hubiera sido posible que atendiendo a ese aspecto concreto yo lo hubiera firmado. Esa es la consecuencia de la manera irregular en que está trabajando la Honorable Cámara.

Aquí se ha planteado una situación que merece la atención y el estudio exhaustivo de los señores diputados. Este no se puede hacer en la forma que lo propone el señor presidente del bloque de la mayoría. No puede decirse de ninguno de nosotros que estemos en una labor obstructiva. Lo que queremos es que las leyes que sancione este Parlamento salgan con el estudio necesario, porque a través de nuestro voto nosotros asumimos una responsabilidad. Tan lo piensa así este bloque, que en mi calidad de presidente del mismo presenté un proyecto de resolución, único expediente legal, único trámite idóneo y adecuado para promover, a través de una resolución de la Cámara, la instancia necesaria para que el Poder Ejecutivo pusiera en ejercicio su facultad constitucional establecida en el artículo 86, inciso 12, de la Constitución Nacional, prorrogando el período ordinario de sesiones por el término de sesenta días.

Yo advertía que la Cámara tenía una cantidad enorme de asuntos y que por mucho que fuera el esfuerzo de los señores diputados, que han dado pruebas de su capacidad y patriotismo al servicio de los grandes intereses del país, por mucho que fuera ese esfuerzo, no iba a ser posible que en esta carrera contra el alma-

naque se pudiera estudiar todos los asuntos antes del 30 de septiembre de 1958, que es el día de hoy. La mayoría no quiso aceptar ese temperamento; tiene ahora el Poder Ejecutivo en sus manos la convocatoria a sesiones extraordinarias. Si este asunto es tan importante y tanto interesa, como lo sostiene el señor diputado por Catamarca —y yo creo que tiene razón—, no hay ninguna duda de que el Poder Ejecutivo lo incluirá entre los asuntos a considerarse en sesiones extraordinarias.

No se nos puede colocar en la tortura de votar asuntos que no conocemos y sobre los cuales se hacen cuestiones de orden constitucional que comprometen la opinión de diputados que, como dije, están asumiendo en cada voto una responsabilidad.

Dos son las soluciones que podrían adoptarse: la primera, que este asunto sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el compromiso de que produzca despacho en el día de la fecha, y en ese caso lo trataríamos; y la otra, la mejor, la más amplia, que en nada obstaculiza la circunstancia de vencer un plazo el 31 de diciembre de 1958, que sea girado a comisión, pero que recién lo considere la Cámara en sesiones extraordinarias, si es que el Poder Ejecutivo lo incluye entre los asuntos a tratar en las mismas.

Restablezcamos la paz en este recinto, para seguir trabajando con eficacia al servicio de los grandes intereses del país. Pero para que nosotros podamos tener una palabra amable, serena, es necesario que se respete esta justa reacción contra un proyecto de ley que tiene dificultades que son, desde todo punto de vista, muy serias, y que provocan, desde luego, las dudas y las disidencias de este sector.

Como consecuencia de todo lo que he dicho, propongo concretamente que este proyecto pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, si la mayoría lo quiere, y que se le fije término para que se expida en el día de hoy; o, si la mayoría resuelve otra cosa, que sería lo mejor, que este asunto sea incluido, si es que el Poder Ejecutivo se hace eco de estas palabras, entre los asuntos a considerar en las sesiones extraordinarias.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Mercado.** — Lo expresado por el presidente de nuestro bloque en cuanto al motivo de nuestra firma en ese despacho ha precisado que se hizo únicamente con relación al aspecto financiero del mismo. Además, esa firma la he puesto, como en otros muchos despachos, aquí, en mi banca, en un acto de confianza, en un acto de buena fe.

Ya días pasados formulé una impugnación al método de trabajo que ha impuesto a esta Cámara el bloque de la mayoría. Esta es una de las consecuencias que debe producir esa forma de trabajar.

Con estas palabras, dejo aclarada la razón de mi firma en el despacho que está a consideración de la Honorable Cámara.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Casas.** — Señor presidente: ratifico en un todo las palabras pronunciadas por los señores diputados Marini y Mercado. Yo, como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, he puesto mi firma al pie de ese despacho en las circunstancias aludidas por el señor diputado por Buenos Aires, compañero de sector, en la convicción de que el mismo había sido suscrito por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Industrias y atendiendo principalmente al gasto y su imputación como materia específica de la Comisión de Presupuesto.

En cuanto a la afirmación hecha en este recinto de que debió haber intervenido la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado que habla, en el caso que consideramos, obró en la confianza de que el giro dado a este asunto por la Presidencia fue el correcto. Nada más, señor presidente.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Gómez Machado.** — Indiscutiblemente, el planteo formulado por el señor diputado Marini es muy distinto del formulado por el diputado por la Capital, señor Verdaguer, y del que ha expuesto el diputado por Córdoba, doctor Bercerra.

El señor diputado Verdaguer ha afirmado que el Poder Ejecutivo estaba apañando irregularidades, manifestación que los integrantes del sector de la mayoría no pueden aceptar.

**Sr. Verdaguer.** — Me he referido, en forma circunstancial, al aspecto vinculado con la CADE, la ANSEC, y al asunto del petróleo.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Verdaguer.** — Y a éste también.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Sírvanse no dialogar los señores diputados. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Gómez Machado.** — Señor presidente: las manifestaciones del señor diputado por la Capital, en lugar de favorecer la situación la agrava, porque no se ha referido a este planteo sino a otros de carácter tangencial.

Pero frente a la expresión del señor presidente del bloque de la minoría no tenemos inconveniente —en el afán de trabajar ordenadamente en este debate— en que el despacho pase inmediatamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de que ella produzca su dictamen en esta misma mañana. De esta manera demostramos que queremos trabajar, y que se encuentra muy lejos de nuestro espíritu sorprender al sector de la minoría ni a nadie. Con esto quiero significar que esta reacción es consecuencia lógica de las sensatas palabras pronunciadas por el señor diputado Marini, y no

de las expuestas por el señor diputado por la Capital. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Decavi).** — Se va a votar la moción del señor diputado Verdaguer, de que el despacho pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

— Resulta afirmativa de 64 votos; votan 126 señores diputados.

**Sr. Vinciguerra.** — Hago indicación de que se rectifique la votación.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Si hay asentimiento, se rectificará la votación.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Se va a votar la moción del señor diputado Verdaguer, de que el despacho en consideración pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la recomendación propuesta por el señor diputado por Santa Fe, de producir despacho esta misma mañana.

— Resulta afirmativa de 112 votos; votan 127 señores diputados.

**Sr. Presidente (Decavi).** — El despacho pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la recomendación de producir despacho esta misma mañana.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Pozzio.** — Señor presidente: mantengo mi punto de vista en el sentido de que votaré este despacho en forma negativa.

Existen en la comisión constancias fehacientes de cuál ha sido el comportamiento del diputado que habla en cuanto a la labor desarrollada y el cumplimiento en la asistencia a todas las reuniones.

No es posible que este asunto se pase ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales con la recomendación de expedirse en el día de la fecha, es decir esta misma mañana del 30 de septiembre. Desde ya manifiesto que no he de concurrir a la reunión de esa comisión, dejando así a salvo mi responsabilidad.

**Sr. Gómez Machado.** — Pudo haberlo manifestado antes de que se votara.

**Sr. Pozzio.** — He realizado una manifestación personal.

**Sr. Gómez Machado.** — Es una manifestación con ventaja.

**Sr. Pozzio.** — No es con ventaja, señor diputado.

#### 46

#### ORDEN DE LA LABOR

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Solanas.** — Solicito de la Presidencia que informe si ha concluido la consideración de los asuntos que han integrado el plan de trabajo.

**Sr. Presidente (Decavi).** — La eta. enunciada por el señor diputado Prece ha sido concluida.

**Sr. Solanas.** — Bien, señor presidente. Hago indicación de que tratemos el despacho venido en revisión del Honorable Senado relativo al artículo 28 del decreto ley 6.403/55. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) Tengo entendido que se encuentra en la mesa de la Presidencia con despacho de mayoría y minoría de la Comisión de Educación.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Blanco.** — Señor presidente: el sector de la minoría adhiere a la indicación formulada por el señor diputado por Santa Fe.

Entiendo que en razón del interés nacional de la posición clara y rotunda adoptada por esta Honorable Cámara en oportunidad de votarse el artículo 28, este cuerpo debe abocarse de inmediato a la consideración del despacho de la Comisión de Educación.

**Sr. Gómez Machado.** — Señor presidente: propongo un cuarto intermedio a fin de reunir al sector de la mayoría con el propósito de considerar el plan de labor.

— Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Parodi Grimaux.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Decavi).** — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Parodi Grimaux.** — Señor presidente: quiero recordar que hoy —30 de septiembre y último día del período parlamentario—, vence la ley de alquileres. Solicito al señor diputado Gómez Machado y al señor diputado Solanas —dado que este asunto no va a demandar muchos minutos de consideración—, que acepten resolver en primer término esta cuestión, para luego pasar al cuarto intermedio propuesto. Existe una razón de urgencia que obliga a formular este pedido.

**Sr. Gómez Machado.** — Señor presidente: no tengo inconveniente en adherir a la proposición del señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Marini.** — ¿Eso significa, entonces, que el señor diputado por Santa Fe posterga su moción de pasar a cuarto intermedio?

**Sr. Gómez Machado.** — He postergado la moción de pasar a cuarto intermedio accediendo a la sugerencia de que sea tratado inmediatamente el asunto vinculado con la ley de locaciones urbanas.

**Sr. Solanas.** — Amplío mi moción, señor presidente. Solicito que se traten estos dos asuntos, es decir, en primer término, el relacionado con la ley de locaciones urbanas y, en segundo término, la sanción venida en revisión del Honorable Senado, vinculada con el artículo 28 del decreto ley 6.403/55.

**Sr. Marini.** — De acuerdo.